

Intercambio Epistolar sobre Ética y Política

Guerra, política, resistencias y alternativas (En torno al debate sobre ética y política)

Arturo Anguiano

Guerra del miedo e inseguridad

El texto del Subcomandante Insurgente Marcos¹ plantea cuestiones centrales que caracterizan la situación actual en el país. La guerra contra el llamado crimen organizado, particularmente contra las mafias del narcotráfico, que desde el comienzo de su mandato ha puesto en práctica Felipe Calderón, es una guerra que no dice lo que es, que se disfraza y, en los hechos, ha condicionado el conjunto de la gestión estatal, convirtiéndose en el signo distintivo del panismo en el poder. Resulta claro que esa guerra no se le impuso a Calderón, no fue resultado de una crisis específica relacionada con algún salto cualitativo de la acción del crimen organizado que

requiriera, sin remedio, cambiar en forma radical las prioridades gubernamentales.

El narcotráfico y sus implicaciones envolventes son cuestiones que vienen de lejos, con muchas aristas y, sobre todo, no es, ni nunca ha sido, ajeno a los gobiernos, al aparato estatal ni, mucho menos, a la oligarquía del dinero. Es un problema que tiene que ver con la manera como la corrupción se convirtió desde siempre en un rasgo no sólo del régimen patrimonialista y su funcionamiento, sino en parte de la cultura política que ha arraigado duradera y hondamente en nuestro país. También se liga a las estrategias neoliberales que han pauperizado a amplias capas de la población, dejándolas sin expectativas, y, por supuesto, a las formas perversas

de acumulación impulsadas por la mundialización del capital.

La guerra de Calderón sólo apunta a lo más evidente que es la producción y trasiego de drogas hacia Estados Unidos sin atacar las causas de fondo que podrían dismantelar a ese negocio rentable. Es, más bien, una suerte de huida hacia adelante, de fuga, ante una situación de crisis política acarreada por la manera fraudulenta como se convirtió en presidente de la República y la consiguiente crisis de legitimidad de las instituciones estatales que trajo consigo. Es, como nos recuerda Carlos Aguirre Rojas, otra forma de la política estatal², una expresión perversa de la incapacidad de formular alternativas a la crisis estatal que no cesa.

El viraje hacia la guerra fue, al inicio, un elemental lance en busca de reconocimiento a través de acciones de fuerza, sacando a la calle al ejército revestido ilegalmente con funciones policíacas (condenando de entrada a las distintas policías y a todo el aparato de procuración de justicia que parecieran como incompetentes y sospechosas). Pero, de inmediato, la situación se le fue de las manos al presidente y la violencia impuso su propia lógica arrolladora. Proclamando el objetivo prioritario de restablecer la seguridad que sus propias acciones no han dejado de empeorar y generalizar, en realidad, solamente busca desesperadamente un consenso social, un reconocimiento, que no alcanza sino todo lo contrario. Operaciones judiciales fallidas; criminalización de la disidencia y las resistencias sociales; enfrentamientos frecuentes y casi siempre inesperados entre las fuerza paramilitares (cárteles de la droga) y militares (incluida la marina, también lanzada a la guerra fuera de su ámbito natural y sus funciones); retenes y operaciones militares selectivas y masivas han dejado una larga estela de violaciones reiteradas de los derechos humanos que, en lugar de legitimar al gobierno, han potenciado el desprestigio de las fuerzas armadas, que invariablemente aparecen como arbitrarias, prepotentes y por encima de la legalidad. Más de 40 mil muertos ha sido hasta ahora el pesado costo de la guerra de Felipe Calderón. Tal vez la mayoría producto de los enfrentamientos de



las diferentes mafias criminales o de éstas con el ejército, pero muchos, cientos o miles de víctimas (incluso niños) ajenas al conflicto, justificadas cínicamente como “daños colaterales”.

Así, el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) le apostó a la seguridad, a la que convirtió en el signo definitivo de su sexenio, canalizando recursos económicos y de todo tipo cada vez más desproporcionados, como lo señala en su texto el Sup Marcos. Pero más que una guerra para rescatar e imponer la seguridad perdida en ciertas regiones o estados sensibles por las acciones del crimen organizado, lo que ha hecho es generalizar la inseguridad en todo el país. La presencia masiva del ejército en las calles de las ciudades y en todo tipo de lugares altera la vida de la gente, que más que sentirse protegida se siente amenazada y sufre toda clase de controles, ultrajes y represalias sin que cese la presencia igualmente amenazante y letal del crimen organizado. La arbitrariedad, los montajes y las mentiras de los militares y del gobierno, reforzados con el aval indiscriminado y apabullante de los medios de comunicación, son otra cara de la guerra de Calderón, que en el fondo ha estado dirigida a expandir el miedo, a generar entre distintas capas sociales un consenso temeroso ante la ausencia de un consenso social efectivo. Pero, mientras más avanza la guerra, incluso las clases privilegiadas van resintiendo sus consecuencias, las cuales no dejan de entrelazarse con una economía en extremo desigual que, si bien los ha enriquecido, va de la crisis al estancamiento.



El Estado aparece, en consecuencia, como el administrador de la inseguridad impuesta por el miedo. El presidente Calderón parece haber aprendido de la experiencia de George W. Bush quien, a través de pretendidas amenazas catastróficas, propaganda mediática orquestada y mentiras de Estado, impuso una guerra contra Irak que le permitió asentar y acrecentar su poder (revestido de mayor violencia e ilegalidad) en Estados Unidos

rización y el despojo, el rechazo a las mascaradas democráticas de la clase política y las exigencias de libertades usurpadas no caben en un México militarizado, sujeto a reglas arbitrarias y a un Estado de sitio virtual. La vida nacional se trastoca en una atmósfera catastrofista reproducida cotidianamente por los medios y los gobiernos, dirigida a arrinconar a los distintos sectores sociales, a forzarlos a

y en el planeta bajo la promesa de la gestión de la inseguridad asentada en el miedo³.

Como lo apunta Sergio Rodríguez Lascano en su contribución al debate⁴, el propósito central de la guerra de Calderón “no es acabar con el narcotráfico, sino destruir el tejido de la sociedad. Paralizar por el temor, el miedo. Gobernar por medio de estos instrumentos”. Ya el anterior gobierno del PAN, encabezado por Vicente Fox, desarrolló una ofensiva contra los movimientos sociales —y en general contra toda resistencia y oposición—, imponiendo su criminalización y recurriendo a formas represivas masivas (como en Atenco y Oaxaca en 2006), características de la guerra de baja intensidad que de Chiapas se fue extendiendo a otros estados. Bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, Calderón ha desarrollado, en tanto política de Estado, la promoción del miedo y la parálisis, esto es, el conformismo, el sometimiento resignado, la inseguridad como modo de vida que requiere la protección estatal y, por consecuencia, la intervención y la presencia masiva y generalizada de las fuerzas armadas.

Las luchas reivindicativas contra la explotación, la precarización y el despojo, el rechazo a las mascaradas democráticas de la clase política y las exigencias de libertades usurpadas no caben en un México militarizado, sujeto a reglas arbitrarias y a un Estado de sitio virtual. La vida nacional se trastoca en una atmósfera catastrofista reproducida cotidianamente por los medios y los gobiernos, dirigida a arrinconar a los distintos sectores sociales, a forzarlos a

posponer sus demandas y acciones para dejar actuar libremente al gobierno en su guerra cada vez más envolvente, o correr el riesgo, claro, de sumarse a la lista de damnificados colaterales. La guerra contra el narcotráfico es solamente una de las guerras del gobierno, pues por todas partes lleva también a cabo una auténtica guerra social contra las condiciones de vida y el empleo; contra las comunidades despojadas de mil maneras de tierras y recursos naturales en favor del capital global; contra los migrantes nacionales y extranjeros; contra los jóvenes, las mujeres y quienes piensan diferente; contra los pueblos indios que no dejan de resistir recreando sus condiciones de organización y convivencia colectivas.

Estado policíaco y autoritarismo

La centralidad de la guerra del gobierno por fuerza conlleva un endurecimiento del autoritarismo, la legalidad (¿la justicia?) a modo, las libertades acotadas y la violación recurrente de los derechos humanos. Como siempre, el Estado de derecho se deja como una simple aspiración a futuro, mientras el Estado de excepción y sus reglas arbitrarias se justifica por la situación de guerra, instaurada como fallida forma de legitimación de un régimen político que hace agua por todos lados.

Rodríguez Lascano señala cómo avanza una suerte de “Estado penal de control a medida que se reduce el Estado social”. Aunque en México difícilmente puede decirse que hubiera existido un auténtico Estado social, lo cierto es que, desde los ochenta, se fueron desmontando prestaciones, logros y reformas sociales que, mal que bien, posibilitaron durante cierto tiempo ciertas seguridades y, por lo mismo, una supervivencia de amplias capas de la población muy por encima de la precarización generalizada que el capitalismo neoliberal ha acarreado. Parodiando a Rancière, podemos decir: “Ahí donde la mercancía reina sin límites... la forma de consenso óptimo es la que está cimentada por el miedo de una sociedad agrupada en torno al Estado guerrero”. Cuando el Estado “mínimo” abandona sus funciones de intervención social y deja libre curso a la ley del capital, aparece “el Estado reducido a la pureza de su esencia, o sea, el Estado policíaco”. Y remata contundente: “La comunidad de sentimiento

que sostiene este Estado, y que administra en su provecho, es la comunidad del miedo”⁵⁵.

La criminalización de resistencias y luchas sociales y la supuesta guerra contra el narcotráfico están agudizando la crisis del Estado y el régimen político que —como vemos— se alejan cada vez más de una reconfiguración democrática. Abandonaron en definitiva la búsqueda de la estabilidad asegurada por procesos políticos libres y optaron por reafirmar la dominación revestida con la protección burda del ejército. Tratan de imponerse mediante la gestión del desorden y la inseguridad.

Pero el miedo promovido desde arriba está siendo vencido en todas partes debido a la indignación que brota abajo ante los métodos de la guerra y sus consecuencias sociales devastadoras. Se van rehaciendo nuevas solidaridades y redes sociales que, en las peores condiciones y a contracorriente, denuncian las campañas de desinformación y manipulación de medios de comunicación amalgamados al poder y develan sus mentiras, sus montajes y fines ocultos. En este sentido abona la propuesta de la mencionada primera carta del Sup Marcos, quien retomó la campaña de *No más sangre* lanzada por varios caricaturistas encabezados por Rius, en donde emplaza a la clase política, organizada en distintos partidos, a dejar de apostar al desastre en su disputa por el poder en 2012, y propone la posibilidad de un gran movimiento plural que pudiera detener la guerra de Calderón.

La movilización nacional que ha logrado articular Javier Sicilia, luego del asesinato de su hijo, Juan Francisco, junto con tres de sus compañeros en Morelos, que fue la gota que derramó el vaso de la rabia contenida, ha comenzado a articularse bajo la forma de un Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad con claros ecos zapatistas. Su Caravana del Dolor —que recorrió el centro y norte del país rumbo a Ciudad Juárez— derivó el pasado 10 de junio en la firma de un Pacto Nacional Ciudadano cuyo desenlace todavía no está claro.

La construcción de las alternativas

La guerra es, sin duda, un elemento decisivo de la situación nacional que no puede soslayarse, de manera que la lucha contra ella en todas sus formas, expresiones y consecuencias es igualmente

fundamental. El problema es cómo hacer convergir y enlazar las múltiples resistencias que brotan y se desarrollan por innumerables rincones del país bajo ritmos, formas de organización y fines muy diversos. Insisto en lo que escribí en un reciente artículo⁶: existe una verdadera revuelta cotidiana de los de abajo que parece invisible pues existe el bloqueo deliberado de los medios. Precisamente, las experiencias de prácticas sociales, autoorganización y resistencia que se despliegan están dando forma a nuevos espacios públicos recuperados y a una política diferente a la estatal que sólo es el reinado de la clase política.

El Sup Marcos menciona la destrucción de las bases del Estado que el capitalismo neoliberal y la guerra del gobierno están provocando. Esto, en realidad, nos remite a la descomposición del régimen político y la imposibilidad de su rehabilitación, lo que urge que se discuta con amplitud a fin de detectar las grietas y fisuras que pudieran embestirse para su caída. El fin de las viejas mediaciones (corporativismo, clientelismo, patrimonialismo) y el agotamiento prematuro de las nuevas (los partidos, las instituciones estatales degradadas) agudizan la crisis política, la crisis estatal que avanza hacia una posible salida autoritaria. La

clase política vive enfrascada en sus luchas por el poder apostando a la descomposición y al desastre nacional con el propósito de mejorar cada quien su relación de fuerzas. El autismo social de todos los partidos contrasta con sus esfuerzos por vincularse o hacerse gratos (gestores creíbles) a la oligarquía financiera desencantada por la incompetencia de los gobiernos del PAN. Las elecciones presidenciales y nacionales del 2012 no serán sino un momento más de la declinación de una política estatal atascada, la que muy probablemente expresará la decepción y la rabia de la sociedad.

Si no se pueden realizar cambios efectivos arriba, es necesario tramarlos abajo. Pero, ¿hay que olvidarse por completo de lo que sucede arriba? ¿No habría que impulsar también la caída de los de arriba, la destrucción definitiva de lo que queda de sus bases y redes de poder, de la dominación que de cualquier forma continúan asegurando a nombre de la oligarquía del dinero?

Esto tiene que ver con la idea que se plantea en el debate





en curso respecto a que todo el mundo actual será destruido, y se entiende que no será una autodestrucción, inmolación, por más que los de arriba pongan mucho en ello. Destruído, sí, pero ¿por quién?, ¿cómo?, ¿bajo qué ritmos?, ¿construyendo espacios autónomos y autogestionarios poquito a poquito?, ¿reformulando geografías y calendarios?, ¿esperando que la gente se harte, se organice por sí misma y se rebele?

La revuelta cotidiana de los de abajo asume muchas e innumerables formas y vías, pero el problema sin duda más apremiante es su carácter fragmentado, y de ahí la urgencia de explorar cómo vincularlas y encontrar su continuidad, su permanencia, su capacidad de crear sedimentaciones. La experiencia de La Otra Campaña debe retomarse, de entrada, rediscutiendo la manera de cómo se llevó a cabo, su significado y resultados. Fue una manera de encontrarse desde abajo, de redescubrirse, de echar lazos, confrontar condiciones y situaciones, pero igualmente para avistar el futuro.

A diferencia de los partidos y sus oligarquías corruptas, necesitamos pensar a largo plazo, redefinir

las perspectivas, pensar de nuevo en términos estratégicos. El movimiento por la paz con justicia y dignidad encabezado por Javier Sicilia es, también, otra experiencia que se sitúa abajo, frente a los otros que son el gobierno y las oligarquías políticas y económicas. Los ensayos como los que realizan las comunidades rebeldes zapatistas están siendo continuados mediante formas específicas en distintos lugares del país. En otros terrenos y espacios, en otras geografías, no dejan de estallar revueltas contra la miseria, la degradación y la opresión impuestas por el capitalismo, pero igualmente contra la guerra del gobierno. ¿Cómo articularlas duraderamente?

El acorralamiento y la situación de sobrevivencia, el miedo y la resignación que ha pretendido imponer el gobierno de Felipe Calderón, no han logrado impedir el florecimiento de las resistencias de los de abajo. Más todavía, la exclusión que implica el monopolio de la política estatal por parte de los partidos, igualmente produce un alejamiento creciente de los de abajo de los circuitos institucionales caracterizados por el clientelismo y la corrupción, y van habilitando espacios públicos

propios que permiten poner en práctica una política muy otra, como dicen los zapatistas.

Nuestra sociedad nunca ha sido completamente pulverizada por la individualización y mercantilización generalizadas acarreadas por el capitalismo, pero lo colectivo fue secuestrado por lo corporativo, sometido y jerarquizado. Las figuras políticas que lo acompañaron en los países industrializados (la democracia representativa y las libertades individuales) no generaron en México sino ciudadanos truncos, con derechos usurpados. Ni ciudadanos ni individuos. Lo colectivo apareció por iniciativas de sectores sociales oprimidos y si bien fue confiscado por el corporativismo gestionado por el PRI, tiene ahora más posibilidades de reafirmarse desde y por abajo, construyendo autonomías y rehaciendo la política de los oprimidos, en las comunidades rebeldes que de muy distinta forma y circunstancia brotan a lo largo y lo ancho de la nación.

Lo colectivo debe desprenderse, además, de lo clientelar que está en la base de las relaciones con el poder y, en general, con los de arriba y la

clase política. Lo colectivo implica la solidaridad y la igualdad que solamente pueden construirse precisamente en colectivo, por todas y todos. El individuo solamente se puede desarrollar en relación con los otros individuos, en su socialización, y por ello lo colectivo lo potencia, más que aniquilarlo o disminuirlo. Claro, bajo una lógica solidaria, no de competencia, de guerra de todos contra todos. No puede haber alternativas individuales ni a la guerra contra el narcotráfico y sus secuelas, ni contra la guerra social que el capital y la oligarquía estatal realizan contra los de abajo, sus intereses, necesidades y exigencias de toda índole. Las soluciones sólo serán colectivas, de abajo y a la izquierda, como dice el EZLN.

Otra política ética

Más que los temas de la ética y la política, lo que veo en el debate realizado en *Rebeldía* es una preocupación (una necesidad) por una nueva política bajo principios claros conforme a los intereses de los de abajo. ¿Cómo construir una alternativa



anticapitalista, democrática y autogestionaria a largo plazo? La organización es decisiva, pero cuál (o cuáles), cómo, bajo qué principios, en qué terrenos y, sobre todo, dentro de qué perspectiva, esto es, qué papel juega en una visión estratégica.

La ética y la política de abajo implican la dignidad, la congruencia, la verdad, exactamente lo contrario a lo que caracteriza a la política estatal, la política de arriba y a la oligarquía estatal que todos aquí llamamos clase política y que bien podemos definir como de pesadilla. Implica además, por supuesto, la igualdad, la solidaridad y la fraternidad, ésta última también casi siempre olvidada.

Me parece pertinente y central que se recupere la reflexión crítica sobre el proceso y las circunstancias que vivimos, en realidad, sobre todo lo existente que por supuesto nos atañe. Pero requiere que se asuma en colectivo, no sólo como suma de reflexiones individuales que se confrontan, en debate. Sobre todo en vistas a, y por, la práctica, la acción, el pensar y el hacer colectivos. Y aquí me parece erróneo criticar a los que piensan, conviven, enfrentan de diversas formas a los de arriba e incluso resisten y luchan en los espacios de la academia, de las universidades, de los centros de investigación y enseñanza. La crítica verdadera, radical en el sentido de Marx, es en sí una expresión de rebeldía, de disidencia respecto al poder y sus mandarines. “Poner el cuerpo”, como dice Raúl Zibechi⁷, es comprometerse, actuar, no sólo escribir o lanzar ideas, lo que puede suceder en una gran variedad de terrenos y por vías muy diversas. Frente a los intelectuales “institucionales”, devenidos incluso contras, como tantos en México en los últimos decenios (en realidad desde siempre), seducidos por el poder y el dinero, hay una gran franja de resistentes, de rebeldes, incluso revolucionarios, cuyos análisis y críticas son importantes para descifrar las claves de la dominación y ayudar a enfrentarla, por supuesto, desde abajo. Son una fuente inagotable de pensamiento crítico, comprometido.

No percibo ninguna crisis terminal ni ningún fin de la política, como los que anuncia Carlos Aguirre Rojas en su contribución. De entrada, considero que no existen crisis terminales del capitalismo sin la acción de sujetos sociales colectivos que lo derroquen, destruyan sus poderes, sus relaciones, su Estado. La política

que veo en crisis es la política de arriba, la política estatal que pretende subsumir cualquier otra forma de política; la política de los juegos de representación ilusoria y de los espacios públicos institucionales monopolizados por los actores políticos oficiales; la política devenida mediática, al gusto y bajo la agenda dictada por lo monopolios de comunicación masiva. Pero la política puede ser un arma de los de abajo, quienes pueden retomarla como el espacio de la confrontación, de la disidencia, de la formulación de decisiones y prácticas colectivas dirigidas a dar vida y convivencia a las comunidades en el espacio común. De nuevo retomo a Jacques Rancière: “La política, en el sentido fuerte del término, es la capacidad de quien sea de ocuparse de los asuntos comunes. Comienza con la capacidad de cambiar su lenguaje ordinario y sus pequeños dolores para apropiarse el lenguaje y los dolores de los otros”⁸. Y todavía va más allá: “Hay política, desde mi punto de vista, en todas las formas de lucha, de acción, de intervención que reafirmen la decisión sobre los asuntos comunes como asunto de quien sea, y como la demostración de igual capacidad de quien sea” (p. 181).

La política de abajo es lo contrario a la política de especialistas que la monopolizan y la convierten en un espacio exclusivo y restringido, ajeno a la mayoría de la sociedad, sobre todo, de quienes no son los dueños del dinero. Es la política de los iguales de verdad, no en la formalidad de las leyes, sino en la vida cotidiana, como compañeros, colegas, vecinos, amigos, etcétera. La política de abajo es la invención cotidiana de la política en todos los terrenos, en todas las circunstancias, en todas las luchas. No reconoce la separación de lo social y de lo político, sino parte como presupuesto de su interrelación, de su carácter complejo, siempre político-social. La política de abajo, la política del oprimido, no reconoce representantes ni delegados, por más que se necesiten en algún momento mediaciones, y por esto la revocación de mandato es condición. Es, entonces, la acción directa, la autonomía, la autogestión realizadas por los directamente involucrados.

La política del oprimido es una política de resistencia, pero igualmente de reafirmación de identidades, de confrontación, de lucha por restablecer las condiciones y bases de la convivencia

igualitaria en el espacio común. Decir que es una política abajo y a la izquierda, significa que no se realiza en los espacios acondicionados por el Estado, sino a través de otros cauces y en los espacios que recupera, reacondiciona o crea. Es, por supuesto, una política que apuesta al futuro, que busca preparar el porvenir igualitario, justo, donde la democracia, la libertad y la igualdad prevalezcan. Pero lo hace desde aquí y desde ahora, sin importar las consecuencias ni los desenlaces siempre inciertos. Como escribió Daniel Bensaid: “Si el orden existente es inaceptable, hay que esforzarse por cambiarlo, sin ninguna garantía de lograrlo”⁹. Como decía Mario Payeras¹⁰, la política del oprimido es, en fin, el “asedio de la utopía”.

Notas :

1. Subcomandante Insurgente Marcos, “Apuntes sobre las guerras. (Carta primera a Don Luis Villoro Toranzo)”, *Rebeldía*, México, núm. 76, 2011.
2. “La guerra, la política y la ética. Reflexiones sobre una carta”, *Rebeldía*, México, núm. 77, 2011.
3. Véase Jacques Rancière, *Moments politiques*, La fabrique éditions, Paris, 2009, p. 124.
4. “La clase política y la guerra”, *Rebeldía*, México, núm. 77, 2011. En el mismo sentido, del mismo autor, “2010: de la crisis de dominio a la organización

- independiente”, *Rebeldía*, México, núm. 76, 2011.
5. *Ídem*, p. 125.
6. “La revuelta cotidiana”, *Rebeldía*, México, núm. 75, 2010.
7. “La ética necesita un lugar otro para echar raíces y florecer”, *Rebeldía*, México, núm.77, 2011.
8. Libro citado, p. 67.
9. Daniel Bensaid, “Por une politique de l’opprimé”, *ContreTemps*, Paris, Nouvelle série, n 6, 2e trimestre 2010, p. 42.
10. “Creo en el valor de la utopía como instrumento heurístico y como referencia teórica en esta hora de desplomes y recomposiciones, confusión y pesimismo en la posibilidad de alcanzar una sociedad con rostro y alma humanas... creo en el deber de los luchadores sociales de asediar la utopía, pensándola, discutiéndola, construyéndola como proyecto a partir de los hechos nuevos y las necesidades de hoy. No partimos de cero. En la experiencia hemos aprendido, y en los nuevos movimientos sociales distinguimos de nuevo, por momentos, el clamor por una sociedad igualitaria, demoledora de lo viejo, creadora de nuevos conceptos y prácticas sobre las relaciones sociales, contra toda forma de opresión social y sexual, como preocupación y acción por detener el etnocidio y el ecocidio” (*Asedio a la utopía. Ensayos políticos, 1989-1994*, Luna y Sol, Guatemala, 1996, p. 45).

